

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CATALUÑA
(SEGUNDO SEMESTRE 2017)**

—

**DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CATALUNYA
(SEGON SEMESTRE 2017)**

MARINA RODRÍGUEZ BEAS
Profesora de Derecho Administrativo

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)

Sumario: 1. Introducción. 2. La primera Ley del cambio climático. 3. La Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. 4. El Reglamento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. 5. Otras normas de interés. 6. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. 6.1. La estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña. 6.2. La agenda urbana catalana. 6.3. El mapa de calidad del cielo nocturno en Cataluña.

1. INTRODUCCIÓN

En el periodo examinado (del 31 de marzo de 2017 al 1 de octubre de 2017), son pocas las novedades normativas en materia ambiental que se han producido en Cataluña. De hecho, únicamente se ha aprobado una norma con rango de ley específicamente ambiental: la Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático. No obstante, también cabe mencionar la aprobación de una ley con alguna incidencia en la materia ambiental. Se trata de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias, a la que nos referiremos más adelante.

En el ámbito reglamentario, la norma más destacable es el Decreto 141/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

En cuanto a los proyectos de ley en trámite, en este periodo ha iniciado su tramitación la Proposición de ley de creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El pasado mes de septiembre, la proposición de Ley presentada conjuntamente por Junts pel Sí, PSC y Catalunya Sí que es Pot, superó el debate a la totalidad en el Pleno del Parlament de Cataluña. De este modo se inició el trámite parlamentario para la aprobación de la ley que concreta la creación de un nuevo ente, la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Con este nuevo ente se pretende potenciar la conservación del patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad, con criterios de integridad, sostenibilidad, persistencia y eficacia.

En este sentido, se pretende impulsar y coordinar las políticas en materia de biodiversidad de manera integral, mediante este ente de estructura independiente.

Además, como se pone de manifiesto en su Preámbulo, la creación de este nuevo ente responde a una reivindicación histórica de entidades,

administraciones y organismos vinculados a la conservación del patrimonio natural.

El objetivo de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es “la protección, la planificación, la gestión, la restauración, la mejora y el estudio del medio natural de Cataluña, tanto en el ámbito continental como marino, con la finalidad de conservar el patrimonio natural, la biodiversidad y la geodiversidad, y garantizar los servicios ambientales y las externalidades económicas positivas de los ecosistemas, con criterios de integridad, sostenibilidad, persistencia y eficacia” (art. 2).

Paralelamente, durante este periodo, se gestaba una iniciativa normativa de interés en materia ambiental. Este es el caso del Anteproyecto de Ley de Territorio, publicado el pasado 25 de mayo de 2017 en el DOGC, junto con la memoria general y la memoria de evaluación del impacto de las medidas propuestas y confiriendo un plazo de 20 días hábiles para formular observaciones, sugerencias o alegaciones.

Tal como se pone de manifiesto en su Preámbulo, esta norma tiene la voluntad de conformar un marco normativo integral, estratégico y estable. Con esta finalidad, la norma deroga el marco jurídico vigente en materia de política territorial, urbanismo, paisaje, regularización y mejora de urbanizaciones, así como algunos preceptos de la legislación de régimen local (la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial; la Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el Plan territorial general de Cataluña; la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje; la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos; la Ley 23/2010, de 22 de julio, de modificación de la Ley 1/1995 y de la Ley 23/1983 para fijar el ámbito de planificación territorial del Penedès; el texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y el Decreto Legislativo que lo aprueba; la Ley 3/2012, del 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto; los artículos 22 a 28 y la disposición adicional décima de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona). También se pretende derogar las disposiciones reglamentarias siguientes: los artículos 2 a 8 y la disposición final segunda del Decreto 169/1983, de 12 de

abril, sobre unidades mínimas de cultivo; el Decreto 397/1984, de 17 de diciembre, sobre el proceso de elaboración del proyecto de Plan territorial general; el Decreto 73/1987, de 20 de febrero, sobre el Plan territorial; los artículos 2.2, 3 y 5 del Decreto 35/1990, de 23 de enero, por el que se fija la unidad mínima forestal; el Decreto 142/2005, de 12 de julio, de aprobación del Reglamento por el que se regula el procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de los planes territoriales parciales; el Decreto 174/2009, de 10 de noviembre, por el que se acuerda el inicio de la revisión del Plan territorial general; y el Decreto 208/2013, de 30 de julio, por el que se desarrolla la Ley 23/2010, de 22 de julio, de modificación de la Ley 1/1995 y de la Ley 23/1983 para fijar el ámbito de planificación territorial del Penedès.

En este sentido, la norma busca establecer un modelo de utilización del suelo sostenible, eficiente y competitivo, que tenga en cuenta la diversidad de territorios. En esta línea, como se afirma en su preámbulo, rehúye de la regulación generalista, uniforme y descontextualizada de la vigente Ley de urbanismo para poder ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad territorial, de actuaciones y de coyunturas con los nuevos instrumentos jurídicos.

En este marco, el artículo 1 de la Ley regula su objeto definiéndolo como la ordenación del territorio de Cataluña, entendida como el conjunto de políticas públicas que permiten establecer un modelo de utilización del suelo sostenible, eficiente y competitivo, que tenga en cuenta la diversidad territorial. El artículo 1 añade que la ordenación del territorio comprende el régimen urbanístico de utilización del suelo, la planificación del territorio, la gestión urbanística de los planes, la política pública de suelo y la protección de la legalidad en esta materia.

También se regulan sus principios, entre los que destaca el ya conocido principio de desarrollo sostenible, y como novedad se incorpora el principio de resiliencia, el cual conlleva la planificación y el impulso de actuaciones que mejoren la capacidad de los espacios abiertos y de las ciudades de superar las crisis previa identificación y análisis de su vulnerabilidad frente a estas (art. 2).

Además, cabe destacar que la norma introduce el principio de no regresión, reconocido jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo, en el caso de modificación de los planes, sujetando a una tramitación calificada aquellas

modificaciones que tienen por objeto la alteración de la calificación de los terrenos destinados a sistemas urbanísticos de espacios libres y de equipamiento comunitario. Asimismo, establece excepciones en el caso que se trate de sistemas urbanísticos de barrio pendientes de adquirir y se cumplan determinadas condiciones relativas a la suficiencia de los sistemas en cuestión.

Finalmente, se puede decir que este Anteproyecto de Ley de Territorio supone un cambio de paradigma en materia, sobre todo, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

2. LA PRIMERA LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El pasado 3 de agosto de 2017, se publicó en el DOGC la Ley 16/2017, de 1 de agosto, de cambio climático. Esta norma tiene por objeto “la regulación de las medidas encaminadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, la definición del modelo de gobernanza de la Administración pública con relación al cambio climático y el establecimiento de impuestos como instrumentos para actuar contra el cambio climático” (art. 1).

Esta Ley, como se afirma en su Preámbulo, persigue básicamente cinco finalidades: conseguir que Cataluña reduzca tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, favorecer la transición hacia un modelo neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, transformar el modelo de producción y acceso a los recursos naturales y energéticos; reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han elaborado durante los últimos años en el ámbito del cambio climático; promover y garantizar la coordinación de todos los instrumentos de planificación sectorial relacionados con el cambio climático y la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, así como fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos; convertirse en un país líder en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías que contribuyan a la mitigación, así como a reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos energéticos externos, a la descarbonización y a la desnuclearización; y hacer visible el papel de Cataluña en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático.

El objeto y las finalidades que persigue esta norma le otorgan ineludiblemente un carácter sustancialmente ambiental.

En cuanto a su contenido, esta norma se estructura en siete capítulos, 56 artículos, siete disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una derogatoria, trece finales y tres anejos.

El capítulo preliminar, disposiciones generales, regula el objeto y las finalidades de la Ley de conformidad con lo señalado anteriormente, así como los principios de actuación de la Administración pública para alcanzar los objetivos de la Ley, tales como el de debida evaluación, el de cálculo objetivo y el de eficacia. El primero, conlleva el “deber de los poderes públicos de evaluar continua y periódicamente el impacto ambiental de cualquier política pública vigente o prospectiva para que su resultado deba tenerse en cuenta en la toma de decisiones respecto a la política concreta” (art. 3.2). El principio de cálculo objetivo implica “el fomento de la puesta en práctica de mecanismos de cálculo de objetivo, con arreglo a criterios nacionales e internacionales aceptados, del impacto de la actuación humana en un determinado sector” (art. 3.3). Asimismo, el principio de eficacia comporta el “deber de adoptar las decisiones jurídicas y políticas más eficientes disponibles en cada momento para alcanzar los objetivos” (art. 3.4).

El capítulo I, por su parte, regula la mitigación del cambio climático. Se establece la obligación por parte del Gobierno de presentar al Parlamento los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes del aire para los periodos de cumplimiento que establezcan la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud para que el Parlamento, si procede, los apruebe. Además, cabe destacar el compromiso del Gobierno en aprobar el Marco estratégico de referencia de mitigación, en el plazo de un año a contar desde la fecha de publicación de la Ley, a propuesta de la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático y con la participación de los entes locales y los demás actores implicados. Como se determina en el apartado segundo del artículo 6, esto es el instrumento que recoge los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero y de los contaminantes del aire para los periodos considerados, así como una propuesta de las medidas necesarias

para alcanzarlos de forma planificada y estableciendo indicadores cuantitativos anuales del impacto de las acciones.

Otro aspecto a reseñar son los presupuestos de carbono. En el artículo 7 se configuran como un mecanismo de planificación y seguimiento para la integración de los objetivos de la Ley en las políticas sectoriales. Para realizar el seguimiento de las emisiones y la planificación de las políticas también se crea un inventario de emisiones a la atmosfera y de sumideros de CO₂ de Cataluña (art. 8).

En el capítulo II se regula la adaptación al cambio climático, estableciendo la obligación de elaborar el marco estratégico de referencia de adaptación. Este marco lo debe elaborar el departamento competente en materia de cambio climático junto con los demás departamentos y con la participación de los actores implicados, previa presentación a la Mesa Social del Cambio Climático, el marco estratégico de referencia, el cual deberá prever: la evaluación de los impactos, de acuerdo con el estado del conocimiento; la identificación de los sistemas naturales, de los territorios y de los sectores socioeconómicos más vulnerables; una propuesta de las medidas de adaptación necesarias para reducir la vulnerabilidad (art. 10).

También se regulan los instrumentos de planificación y programación. Estos, con el objetivo reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, deben tener en cuenta: a) la evaluación sistemática de los impactos observados y previstos del cambio climático sobre los sectores socioeconómicos, los sistemas productivos, los sistemas naturales y los territorios más vulnerables; b) el conocimiento disponible en materia de proyecciones climáticas en Cataluña para varios horizontes temporales; c) el establecimiento de las medidas de respuesta viables económica, social y ambientalmente que deben adoptar las instituciones públicas y los agentes privados con el objetivo de adaptarse a los impactos del cambio climático; d) un sistema de seguimiento de los efectos de la planificación en materia de adaptación.

El capítulo III, políticas sectoriales, trata de integrar en la planificación, la ejecución y el control de las políticas sectoriales del Gobierno las medidas adecuadas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. De este modo, se

introducen una serie de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en los siguientes ámbitos: la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, el agua, la biodiversidad, los bosques, la gestión forestal, la energía, la industria, los servicios, el comercio, las infraestructuras, los residuos, la salud, los transportes, la movilidad, el turismo, la formación profesional, las universidades, la investigación, el urbanismo y la vivienda. Aunque casi todas las medidas recogidas tienen un carácter programático o inspirador, también hay algún ámbito que prevén normativa sectorial. Dentro de este último supuesto, cabe reseñar el ámbito de los residuos.

Según el artículo 22, las medidas que se adopten en materia de residuos deben ir encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la población y las emisiones de gases de efecto invernadero, priorizando la estrategia de residuo cero a fin de ahorrar material y de reducir su procesamiento, especialmente en la reducción y penalización de los productos envasados con un uso intensivo de combustibles fósiles. Al hilo de lo anterior, estas medidas deben encaminarse a: a) la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la gestión de los residuos. Debe hacerse un seguimiento anual de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la mejora en la gestión de residuos; b) la aplicación de la siguiente jerarquía con respecto a las opciones de gestión de residuos: la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje, la valorización energética o cualquier otro tipo de valorización y, finalmente, la eliminación; c) el fomento de la recogida selectiva, especialmente de la materia orgánica, para evitar su deposición en vertederos; d) la incorporación de medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vertederos y el uso de combustible procedente de residuos; e) la sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la valorización de residuos para favorecer la creación de una economía circular.

Además, en la disposición final octava se establece que el Gobierno deberá presentar al Parlamento, en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la ley, un proyecto de ley de prevención de los residuos y de uso eficiente de los recursos, como ley marco que ampare los cambios legislativos necesarios para avanzar hacia una economía circular, baja en carbono y basada

en la sostenibilidad, la producción limpia, la responsabilidad ampliada del productor y el residuo cero.

El capítulo IV, bajo el título de “la Administración en materia de cambio climático” regula las funciones del Gobierno, así como sus órganos competentes. Así en este capítulo se regula la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático – art.30-, como órgano colegiado adscrito al departamento competente en materia de cambio climático que coordina la planificación de las políticas climáticas y hace el seguimiento de su realización. También se regula la Mesa Social del Cambio Climático -art. 31-, el cual canaliza la participación, la información y la consulta a las entidades y organizaciones más representativas del tejido social, económico y ambiental de Cataluña sobre las políticas climáticas. Del mismo modo, se regula el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático –art. 32-, al cual se le designa la función de presentar al Gobierno y al parlamento las propuestas de los presupuestos de carbono para los diferentes periodos temporales y realiza su seguimiento y evaluación.

También cabe destacar el artículo 29, en el cual se obliga a los departamentos de la Generalidad y sus organismos dependientes a: a) disponer de un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero generados por los inmuebles, las instalaciones y los servicios que prestan; b) hacer una auditoría energética de los edificios públicos que sean propiedad de la Generalidad y de aquellos en los que la Generalidad sea arrendataria y las condiciones contractuales lo permitan, así como de sus procesos de trabajo, y promover el autoconsumo; c) establecer un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un programa de actuación que tenga en cuenta las directrices que a estos efectos hayan establecido los departamentos competentes en materia de energía y vivienda, en todo lo relativo a energías renovables y a ahorro y eficiencia energéticas; d) incluir en todos los procedimientos de contratación pública en que resulte adecuado a su objeto especificaciones técnicas y criterios de adjudicación específicos relativos al uso eficiente de recursos y a la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero; e) elaborar y hacer público un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y de las medidas correctoras que se propongan en caso de desviación.

Además, se fomenta la participación de la Administración local en las políticas climáticas –art.33-, la contratación verde –art. 35-, y la colaboración o cooperación internacional –art.36-.

Por su parte, el capítulo V se dedica a la fiscalidad ambiental, estableciendo que “administraciones públicas de Cataluña deben gravar las actuaciones que hacen aumentar la vulnerabilidad o incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero y deben incentivar fiscalmente las actuaciones que favorecen la adaptación al cambio climático o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero cuando sea posible técnica y económicamente”. A tal fin, la Ley crea dos impuestos: el impuesto sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono; y el impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos. No obstante, la regulación de ambos se pospone a la aprobación de sendas leyes, que deberán acomodarse a lo dispuesto en las disposiciones finales undécima y duodécima. Sobre estos dos nuevos impuestos se determina que su recaudación se destinará a nutrir el Fondo Climático.

Pero también se reconfigura el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, creado por la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Cabe destacar que se eliminan las bonificaciones, devoluciones y demás medidas similares sobre la adquisición y el consumo de recursos energéticos de origen fósil y derivados. No obstante, se excluyen de esta eliminación las ayudas a la adquisición y el consumo de recursos energéticos de origen fósil para la maquinaria del sector primario, mientras no exista una fuente de energía alternativa viable (art. 39.3).

Por último, el capítulo VI regula otros instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, como el llamado “Fondo Climático”. Como se prevé en el artículo 51, este fondo de carácter público tiene como objetivo convertirse en un instrumento necesario para la ejecución de políticas y acciones de mitigación y

adaptación al cambio climático. Se financiará con los ingresos procedentes de los instrumentos establecidos por el capítulo V; los ingresos procedentes de la participación en sistemas de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, o de otros instrumentos de fiscalidad climática de ámbito estatal, así como la parte de los ingresos de las asignaciones tributarias del impuesto sobre la renta de las personas físicas para finalidades de interés social que correspondan a la Generalidad y que esta destine a la protección del medio.

Además, en este mismo capítulo también se regula el régimen de comercio de derechos de emisión –art. 53-, la transferencia de conocimiento –art. 53-, la participación pública en planes y programas y acceso a la información ambiental –art. 54-, y la evaluación de la huella de carbono de productos –art. 56-.

En lo que concierne a las disposiciones adicionales de la Ley, cabe destacar algunas por su relevante interés.

En primer lugar, la disposición adicional primera, establece los siguientes objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 es del 40% respecto al año base (1990), del 65% para 2040 y del 100% para 2050; el objetivo de reducción de los óxidos de nitrógeno para el año 2020 es del 35%, y el de reducción de las partículas en suspensión de menos de 10 micras, del 30%; los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero para las energías renovables en la producción energética y para la eficiencia energética son del 100% con el horizonte de un modelo neutro en emisiones de carbono para 2050.

En segundo lugar, la disposición adicional segunda establece que el Gobierno debe impulsar la aprobación de un pacto nacional para la transición energética de Cataluña. Este pacto, junto con el Plan de la energía y cambio climático de Cataluña (2012-2020), y los documentos que se deriven son los elementos de planificación de las políticas de mitigación en el ámbito energético.

Finalmente, la disposición final sexta establece los plazos para la implantación de la huella de carbono de productos, en concreto: los productos a que se refiere el anexo III.1 (productos y materiales para la construcción comercializados en

Cataluña), deben comercializarse de acuerdo con lo establecido por el artículo 56 a partir del 1 de enero de 2020; los productos a que se refiere el anexo III.2 (productos industriales finales comercializados en Cataluña) deben comercializarse de acuerdo con lo establecido por el artículo 56 a partir del 1 de enero de 2021.

En cuanto a las disposiciones finales cabe reseñar que se anuncia la elaboración de proyectos de ley en materia de prevención de los residuos y de uso eficiente de los recursos, de fomento de la agricultura y la ganadería sostenibles o de un proyecto de ley de biodiversidad, patrimonio natural y conectividad biológica.

3. LA LEY 18/2017, DE 1 DE AGOSTO, DE COMERCIO, SERVICIOS Y FERIAS

Dada la estrecha conexión existente entre la protección del medio ambiente y la ordenación del comercio, también debe mencionarse en esta crónica, la aprobación de la Ley 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias.

Esta Ley parte del modelo de convivencia entre la actividad comercial, la prestación de servicios y el uso residencial del suelo de las poblaciones mediterráneas del sur de Europa, el cual permite adoptar criterios de gestión urbana sostenible. En este sentido, en el Preámbulo de esta norma se hace referencia a que esta realidad “(...), que favorece la compactibilidad de los pueblos y ciudades, es precisamente la que plantean, defienden y adoptan los representantes de los diferentes estados de la Unión Europea en la Estrategia territorial europea para un desarrollo equilibrado y sostenible, que ya reconoce la necesidad de ejercer un control sobre la expansión territorial urbana indiscriminada para poder garantizar el crecimiento sostenible de las ciudades en un futuro”. De este modo, se resalta que el conjunto de normativa en materia de comercio de Cataluña es fruto de este modelo, que “pone de relieve la íntima relación existente entre la implantación y el ejercicio de la actividad comercial o de prestación de determinados servicios y la movilidad y la planificación urbanística sostenible (...)”.

Esta nueva Ley nace con el objetivo de actualizar y compilar en un mismo cuerpo legal la dispersa, y en algunos casos obsoleta, normativa existente en materia de comercio interior, horarios comerciales y actividades feriales, aunque deja al

margen la ordenación de los equipamientos comerciales que se mantienen en el Decreto ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales. De este modo, el legislador ha considerado necesario remodelar y compilar en dos textos normativos toda la legislación vigente en la materia manteniendo las características esenciales del modelo comercial mediterráneo –concentración, diversidad y singularidad-, de acuerdo con el conjunto de razones imperiosas de interés general que establece la normativa de la Unión Europea.

En este contexto, esta Ley consolida un nuevo marco normativo dirigido a la consecución de seis objetivos principales. De entre estos objetivos destacamos el sexto, el cual establece principios y criterios que permitan avanzar en el mantenimiento de la función social y dinamización cultural del comercio de proximidad, en la integración de nuevas formas de comercio y los nuevos valores que pueden incorporarse, como el de la economía circular. Pero para el desarrollo de estos principios se requiere la implicación y el impulso de las administraciones locales. Además, esta ley determina el contenido mínimo de la planificación comercial y urbanística para la aplicación general de los criterios de cohesión y equilibrio territorial, defensa de la ciudad compacta, cercanía y fácil acceso de la oferta comercial para los consumidores, la adecuación de la red viaria y la conexión con redes de transporte público.

Con esta norma se persiguen, básicamente, cinco finalidades. En primer lugar, conseguir simplificar la regulación y la reducción de cargas administrativas de los operadores, los cuales deben regirse por una libre y leal competencia, que ha de permitir a todos los ciudadanos el acceso a bienes y servicios, y evitar de forma adecuada las externalidades negativas de la actividad económica. En segundo lugar, establecer los mecanismos para fomentar la profesionalización de la actividad comercial y la prestación de servicios. En tercer lugar, favorecer la cohesión social, ambiental, económica e institucional como base de un modelo de economía circular y sostenible que permita recuperar todos los recursos de forma eficiente, garantice el aprovisionamiento, la diversidad de la oferta y las condiciones básicas para la libre y leal competencia, y configure un modelo de pueblos, ciudades y barrios que ofrezca las mismas posibilidades para todos los ciudadanos y todos los sectores sociales. En cuarto lugar, velar por el respeto

de los derechos y los intereses de los consumidores y usuarios. Finalmente, promover la igualdad de oportunidades y la formación técnica y profesional de los comerciantes y los trabajadores del sector comercial, así como el respeto de los derechos laborales en general, y específicamente las normas en materia de prevención de riesgos laborales.

4. EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el decreto por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Se trata del Decreto 141/2017, de 19 de septiembre, que tiene por objeto el desarrollo normativo para aplicar el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos regulado en la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grande establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

Este impuesto se creó mediante la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y entró en vigor el 1 de noviembre del 2012. Pero ahora el legislador ha considerado necesario revisarlo y modificarlo. Esto se ha llevado a cabo en el capítulo VI de la Ley 5/2017, el cual se dedica a establecer una nueva regulación completa del impuesto que grava las estancias en establecimientos turísticos, aunque según se manifiesta en el Preámbulo, sólo se modifican aspectos concretos. Como novedades de esta norma, cabe destacar la introducción de nuevos supuestos de exención –para las estancias realizadas como consecuencia de causas de fuerza mayor y por motivos de salud-. También destaca la llamada “autoliquidación agregada”, que permite efectuar el pago agregado de las cuotas del impuesto devengadas respecto de un colectivo de sustitutos o de un conjunto de establecimientos o equipamientos. Finalmente, también hay que reseñar que la norma establece la obligación de suministro de información con carácter periódico por parte de las autoridades portuarias.

5. OTRAS NORMAS DE INTERÉS

Además de las reseñadas, en el periodo objeto de análisis se han aprobado algunas otras normas de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, entre otras, en primer lugar, la Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal en Cataluña.

El objeto de esta Orden es la regulación de los instrumentos de ordenación forestal y de su procedimiento de tramitación para su aprobación, modificación, revisión y seguimiento (art.1). Se trata de una Orden que se enmarca en el artículo 32.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, el cual establece que corresponde a las comunidades autónomas la aprobación de las instrucciones de ordenación y el aprovechamiento de montes.

Esta Orden deroga la Orden AAM/246/2013, de 14 de octubre, por la que se regulan los instrumentos de ordenación forestal, integra la regulación de todos los instrumentos de ordenación forestal, independientemente de la titularidad de los terrenos forestales. Se regulan el contenido y el procedimiento de aprobación de los proyectos de ordenación forestal, de los planes técnicos de gestión y de mejora forestales y de los planes simples de gestión forestal, cuyos objetivos deben ser concordantes con las figuras de planeamiento de rango superior.

La finalidad de la nueva Orden es adaptar las previsiones establecidas por la Orden AAM/246/2013, de 14 de octubre, al nuevo tipo de instrumento de ordenación forestal que introduce la última modificación de la Ley 6/1988, de 30 de marzo, por el artículo 177 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. Este nuevo tipo de instrumento de ordenación forestal son los proyectos de ordenación forestal de ámbito municipal y supramunicipal (PFM), que pueden promover las entidades locales y que se aprueban por resolución del director general competente en materia de bosques.

Así pues, la nueva Orden adapta las previsiones establecidas por la Orden AAM/246/2013, a los dos niveles de planificación agrupada para integrar su contenido y agrupar de forma conjunta en una única norma la regulación de los diferentes instrumentos de ordenación forestal existentes.

En cuanto a su contenido, la Orden establece que la planificación de la gestión de las fincas forestales se realiza mediante los siguientes tipos de instrumentos de ordenación forestal (art. 4): a) Proyecto de ordenación forestal (POF), de aplicación a las fincas forestales de titularidad pública superiores o iguales a las 250 hectáreas; b) Plan técnico de gestión y mejora forestales (PTGMF), de aplicación a las fincas forestales de titularidad pública o privada superiores a las 25 hectáreas; c) Plan simple de gestión forestal (PSGF), de aplicación a las fincas forestales de titularidad pública o privada iguales o inferiores a 25 hectáreas.

d) Plan técnico de gestión y mejora forestales conjunto (PTGMFc), para fincas de titularidad pública y/o privada de varias propiedades forestales dentro de un marco territorial conjunto de gestión forestal coherente. e) Proyecto de ordenación forestal de ámbito municipal o supramunicipal (PFM), de aplicación a la totalidad de los terrenos forestales incluidos dentro del marco territorial mínimo correspondiente a un mismo término municipal, o de varios términos municipales, siempre en su totalidad. El PFM, por el alcance de su ámbito y su estructura, incluye también el contenido correspondiente a un plan de prevención de incendios municipal (PPI), y su aprobación implica también la aprobación del PPI correspondiente.

Los instrumentos de ordenación forestal se pueden aplicar de forma individual o agrupada. En el apartado segundo del artículo 4 se regulan los instrumentos de ordenación forestal agrupados, que corresponden a los PTGMFc y PFM, que incluyen fincas públicas y/o privadas de diferentes propietarios. Pero en el citado precepto también se determina que los instrumentos de ordenación forestal agrupados se pueden aplicar dentro de los marcos territoriales siguientes: a) territorios con coherencia forestal en cuanto a la gestión conjunta de sus infraestructuras particularmente y del resto de actuaciones en general, aprobada por la administración forestal competente; y b) territorios que coinciden con la totalidad de uno o más municipios.

Además, para este tipo de instrumento de ordenación forestal, el apartado 4 del artículo 4 determina los requisitos que deben cumplir:

“a) En el caso de los PTGMFc, es necesario un compromiso de adhesión que constituya un mínimo del 30% de la superficie forestal y represente un mínimo del 30% de la propiedad forestal de los terrenos de su ámbito.

b) En el caso de los PFM, es necesario un compromiso de adhesión que constituya un mínimo del 30% de la superficie forestal y represente un mínimo del 30% de la propiedad forestal de los terrenos de su ámbito. Además, al inicio de cada período de cinco años en que se estructura temporalmente el PFM, este porcentaje debe corresponder, al menos, al 50% de la superficie forestal y representar al 50% de la propiedad forestal de los terrenos que constituyen el bloque de ejecución conjunta (BEC) correspondiente.

c) Si en el ámbito de los IOF agrupados la fragmentación de la propiedad forestal es muy elevada, el porcentaje de adscripción de la propiedad exigible se puede reducir respecto al número de propietarios, no de superficie, a petición de la entidad impulsora de la redacción del IOF agrupado, previo informe justificativo emitido por la dirección general competente en materia de bosques respecto a las fincas de titularidad pública y/o por el CPF respecto a las fincas de titularidad privada”.

La finalidad de los instrumentos de ordenación, según el artículo 5, es facilitar y mejorar la gestión de las fincas forestales y maximizar su rentabilidad en bienes y/o servicios en el marco de una gestión forestal sostenible, de acuerdo con los objetivos siguientes: “a) Integrar y compatibilizar los elementos de multifuncionalidad de los terrenos forestales en sus vertientes de producción de bienes y servicios ambientales y socioculturales para asegurar su conservación, garantizar la producción de materias primas y aprovechar adecuadamente los recursos naturales renovables. b) Facilitar la participación de las personas propietarias de los terrenos forestales mediante herramientas de planificación que les permitan implicarse en la gestión de sus terrenos en el marco de la política forestal de Catalunya. c) Colaborar en el aumento de la calidad de vida y en la generación de empleo de las poblaciones rurales, y proveer de materias primas y servicios a la sociedad”.

Asimismo, esta Orden establece el procedimiento y los trámites –capítulo III-, el inicio de las actuaciones que pueden llevarse a cabo y su seguimiento –capítulo IV-, y la gestión forestal agrupada –capítulo V-.

En segundo lugar, en el ámbito de los residuos, también debe destacarse una serie de resoluciones, por las cuales se convocan subvenciones de la Agencia de Residuos de Cataluña para el fomento de la economía circular (Resolución TES/792/2017, de 10 de abril, por la cual se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular, publicada en el DOGC de 19 de abril de 2017; y la Resolución TES/859/2017, de 19 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular, publicada en el DOGC de 25 de abril de 2017).

Esta línea de subvenciones tiene por objeto el fomento de proyectos para la aceleración de la transición hacia una economía más circular en Cataluña, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos materiales y desacoplando el desarrollo económico global del consumo de recursos (anexo 1.1 Resolución TES/792/2017). A los efectos de estas subvenciones, el anexo 2 de la Resolución TES/792/2017, contempla la definición de economía circular como aquella economía que es reparadora y regenerativa por diseño, y que tiene como objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su utilidad y valor más altos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos.

Pueden ser objeto de las subvenciones reguladas en estas bases los proyectos siguientes: proyectos de implementación en el mercado de nuevos productos o servicios incluidos en la categoría de la clase A; los estudios de obtención y testeo de prototipos o proyectos demostrativos de nuevos productos o servicios de las categorías incluidas en la clase B.

El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención será de 24 meses a contar desde la fecha de la resolución de otorgamiento de la subvención.

Los beneficiarios pueden ser las empresas privadas y agrupaciones de empresas privadas que tengan al menos un establecimiento operativo ubicado en Cataluña.

En cuanto al importe, se establece que será de un máximo del 75% de los gastos objeto de la ayuda para pymes o del 50% si el beneficiario no es pyme, con un máximo de 30.000 euros por proyecto.

6. ALGUNAS ACTUACIONES DE INTERÉS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

6.1. La Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Cataluña

El Plan de la XI legislatura del Gobierno de la Generalitat de Cataluña preveía la aprobación de la Estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio de diversidad biológica de Naciones Unidas, de 1992, el Plan 2011 hasta 2020 que lo desarrolla y la Estrategia 2020 sobre biodiversidad de la Unión Europea.

Esta Estrategia tiene un horizonte 2030, y un primer Plan de acción 2017-2021. Se articula en base a seis ámbitos que se basan en seis principios rectores, que definen las prioridades de la acción del Gobierno para conservar la naturaleza y frenar la pérdida de biodiversidad. Estos principios son los siguientes: el conocimiento y la gestión de la información sobre el patrimonio natural; la conservación de los hábitats, las especies y los procesos ecológicos en el marco del cambio climático; el modelo territorial; la integración del patrimonio natural en las políticas sectoriales; la estructura administrativa, la fiscalidad y el marco legal; y la implicación social.

Entre los meses de marzo y mayo de 2017 se desarrolló el proceso de participación ciudadana de la Estrategia para dar a conocer los documentos iniciales de la Estrategia y recoger las aportaciones de los sectores que están más vinculados con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad en particular, y de la ciudadanía en general.

Fruto de este proceso participativo, la propuesta de objetivos y acciones de la Estrategia presentada en abril de 2017 ha quedado modificada, dando lugar a la versión del documento publicado en julio de 2017.

Como se afirma en el Informe de Resultados y retorno del proceso de participación ciudadana, durante el proceso se recibieron más de 700

aportaciones. Después de ser analizadas y valoradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se han incorporado en un 75,38%. La incorporación ha sido total en un 61,81% (437 propuestas) y parcial en un 13,57% (96 propuestas). El resto, un 24,60% (174 propuestas) no se ha incorporado en el documento de la Estrategia.

6.2. La Agenda Urbana catalana

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña se comprometió, en la Reunión de la Asamblea general de las Naciones Unidas (ONU), celebrada el pasado mes de septiembre en Nueva York, a implementar los acuerdos alcanzados en la Nueva Agenda Urbana aprobada en octubre en Ecuador. Como consecuencia de esto, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad está llevando a cabo la redacción de la Agenda Urbana de Cataluña. Esta Agenda se basa en una perspectiva más territorial, entendiendo que debe entenderse más allá de las áreas urbanas o de las principales áreas metropolitanas. Además, la hoja de ruta para la elaboración de la Agenda Urbana de Cataluña también contempla la creación de un Grupo de trabajo interdepartamental, así como una Asamblea Urbana de Cataluña

Traemos a colación también el Acuerdo del Gobierno GOV/112/2017, de 1 de agosto, para impulsar la elaboración del Pacto nacional para la renovación urbana de Cataluña. Los departamentos de Gobernación y de Territorio y Sostenibilidad impulsan el Pacto nacional para la renovación urbana con el objetivo de potenciar la renovación, mejora y transformación de ciudades, pueblos y barrios con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, con especial incidencia en la necesidad de incrementar los niveles de rehabilitación hasta alcanzar los estándares de otros países.

En este sentido, este Pacto nacional pretende ser el marco de referencia para la creación de políticas de renovación urbana desde un punto de vista integral, vinculado a la Agenda urbana catalana.

Algunas de las líneas de actuación son el bienestar y confort de las personas, la seguridad estructural, la cohesión social y prevención y corrección de desigualdades y vulnerabilidades, la transición energética y la reducción de emisiones en CO₂, la economía circular y colaborativa, la introducción de nuevas

y mejores prestaciones, el acceso a la vivienda y en la ciudad y la aplicación de las nuevas tecnologías, entre otros.

El impulso al proceso de elaboración del Pacto de renovación urbana lo asume la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, y la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Para ello, crearán la Mesa del Pacto nacional para la renovación urbana, que deberá elaborar el documento del Pacto nacional en el período de un año.

6.3. El Mapa de calidad del cielo nocturno en Cataluña

Desde 2012, la Dirección General de Calidad Ambiental puso en marcha el proyecto de evaluar la calidad del cielo nocturno en los parques naturales y otros espacios de interés natural de Cataluña, con la realización de campañas de medición del brillo del fondo del cielo anuales, con el objetivo de detectar los que conservan mejores condiciones y de impulsar proyectos de protección.

Siguiendo esta línea, en julio de 2017 se ha publicado el Informe de la Campaña de evaluación de la calidad del cielo nocturno en Cataluña 2016, elaborado por el Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica. Paralelamente se ha procedido a actualizar el Mapa de calidad del cielo nocturno en Cataluña.

De los resultados de la última campaña se concluye que el territorio del Montsec sigue destacando por tener la mejor calidad de cielo nocturno, continúa siendo de categoría excepcional, y que las zonas que conservan unas mejores condiciones de calidad del cielo se concentran en la Franja de Poniente y el Pirineo.

Esta última campaña también demuestra que el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Marurici tiene una calidad de cielo nocturno muy buena y en alguna área, es excepcional. Además, se constata que los parques naturales de los Ports y del Cadí-Moixeró tienen un cielo oscuro de elevada calidad, mientras que el Cap de Creus y al Montgrí-Illes Medes y Baix Ter depende de la proximidad a los núcleos urbanos de la zona que se analice.

Además, este año se han introducido en el Mapa los resultados de los análisis realizados en la conurbación barcelonesa. Estos resultados revelan una calidad del cielo nocturno baja o muy baja, siendo necesario desplazarse más de 100 km para poder disfrutar de una visión clara de la Vía láctea.

Sumari: 1. Introducció. 2. La primera Llei del canvi climàtic. 3. La Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 4. El Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. 5. Altres normes d'interès. 6. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. 6.1. L'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. 6.2. L'Agenda Urbana catalana. 6.3. El mapa de qualitat del cel nocturn a Catalunya.

1. INTRODUCCIÓ

En el període examinat (del 31 de març de 2017 a l'1 d'octubre de 2017), les novetats normatives des del punt de vista ambiental que han tingut lloc a Catalunya són poques. De fet, únicament s'ha aprovat una norma amb rang de llei específicament ambiental: la Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic. No obstant això, també cal esmentar l'aprovació d'una llei amb alguna incidència des del punt de vista ambiental. Es tracta de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, a la qual ens referirem més endavant.

En l'àmbit reglamentari, la norma més destacable és el Decret 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Quant als projectes de llei en tràmit, en aquest període ha iniciat la seva tramitació la Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. El passat mes de setembre, la proposició de llei presentada conjuntament per Junts pel Sí, PSC i Catalunya Sí que és Pot, va superar el debat a la totalitat en el Ple del Parlament de Catalunya. D'aquesta manera es va iniciar el tràmit parlamentari per aprovar la llei que concreta la creació d'un nou ens, l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Amb aquest nou ens es pretén potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficàcia.

En aquest sentit, es pretén impulsar i coordinar les polítiques sobre biodiversitat de manera integral, mitjançant aquest ens d'estructura independent.

A més a més, com posa de manifest el preàmbul, la creació d'aquest nou ens respon a una reivindicació històrica d'entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació del patrimoni natural.

L'objectiu de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és "la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de

Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí, amb la finalitat de conservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i garantir els serveis ambientals i les externalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficàcia" (art. 2).

Paral·lelament, durant aquest període, es gestava una iniciativa normativa d'interès des del punt de vista ambiental. Aquest és el cas de l'Avantprojecte de Llei de territori, publicat el passat 25 de maig de 2017 en el DOGC, juntament amb la memòria general i la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades i amb un termini de vint dies hàbils per formular observacions, suggeriments o al·legacions.

Tal com posa de manifest el preàmbul, aquesta norma té la voluntat de conformar un marc normatiu integral, estratègic i estable. Amb aquesta finalitat, la norma deroga el marc jurídic vigent pel que fa a política territorial, urbanisme, paisatge, regularització i millora d'urbanitzacions, així com alguns preceptes de la legislació de règim local (la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial; la Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla Territorial General de Catalunya; la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge; la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics; la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès; el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i el decret legislatiu que l'aprova; la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost; els articles del 22 al 28 i la disposició addicional desena de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona). També es pretén derogar les disposicions reglamentàries següents: els articles del 2 a 8 i la disposició final segona del Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre unitats mínimes de cultiu; el Decret 397/1984, de 17 de desembre, sobre el procés d'elaboració del projecte de Pla Territorial General; el Decret 73/1987, de 20 de febrer, sobre el Pla Territorial; els articles 2.2, 3 i 5 del Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual s'estableix la unitat mínima forestal; el Decret 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials; el Decret

174/2009, de 10 de novembre, pel qual s'acorda l'inici de la revisió del Pla Territorial General; i el Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per determinar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

En aquest sentit, la norma busca establir un model d'utilització del sòl sostenible, eficient i competitiu, que tingui en compte la diversitat de territoris. En aquesta línia, com s'afirma en el preàmbul, eludeix la regulació generalista, uniforme i descontextualitzada de la vigent Llei d'urbanisme per poder oferir una resposta adequada a la diversitat territorial, d'actuacions i de conjuntures amb els nous instruments jurídics.

En aquest marc, l'article 1 de la llei en regula l'objecte definint-lo com l'ordenació del territori de Catalunya, entesa com el conjunt de polítiques públiques que permeten establir un model d'utilització del sòl sostenible, eficient i competitiu, que tingui en compte la diversitat territorial. L'article 1 afegeix que l'ordenació del territori comprèn el règim urbanístic d'utilització del sòl, la planificació del territori, la gestió urbanística dels plans, la política pública de sòl i la protecció de la legalitat des d'aquest punt de vista.

També se'n regulen els principis, entre els quals destaca el ja conegut principi de desenvolupament sostenible, i com a novetat s'incorpora el principi de resiliència, que comporta la planificació i l'impuls d'actuacions que han de millorar la capacitat dels espais oberts i de les ciutats de superar les crisis prèvia identificació i anàlisi de la seva vulnerabilitat enfront d'aquestes crisis (art. 2).

A més, cal destacar que la norma introdueix el principi de no regressió, reconegut jurisprudencialment pel Tribunal Suprem, en el cas de modificació dels plans, subjectant a una tramitació qualificada les modificacions que tenen per objecte l'alteració de la qualificació dels terrenys destinats a sistemes urbanístics d'espais lliures i d'equipament comunitari. Així mateix, estableix excepcions si es tracta de sistemes urbanístics de barri pendents d'adquirir i si es compleixen determinades condicions relatives a la suficiència dels sistemes en qüestió.

Finalment, es pot dir que aquest avantprojecte de Llei de territori suposa un canvi de paradigma, sobretot, pel que fa a ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

2. LA PRIMERA LLEI DEL CANVI CLIMÀTIC

El passat 3 d'agost de 2017 es va publicar al DOGC la Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic. Aquesta norma té per objecte "la regulació de les mesures encaminades a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, la definició del model de governança de l'Administració pública en relació amb el canvi climàtic i l'establiment d'impostos com a instruments per actuar contra el canvi climàtic" (art. 1).

Aquesta llei, com afirma en el preàmbul, persegueix bàsicament cinc finalitats: aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos d'efecte hivernacle com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició cap a un model neutre en emissions de gasos d'efecte hivernacle i, al mateix temps, transformar el model de producció i accés als recursos naturals i energètics; reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s'han elaborat durant els últims anys en l'àmbit del canvi climàtic; promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics; convertir-se en un país capdavanter en la recerca i aplicació de noves tecnologies que contribueixin a la mitigació i a reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs, a la descarbonització i a la desnuclearització; i fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

L'objecte i les finalitats que persegueix aquesta norma li atorguen ineludiblement un caràcter substancialment ambiental.

Quant al contingut, aquesta norma s'estructura en 7 capítols, 56 articles, 7 disposicions addicionals, 6 disposicions transitòries, 1 de derogatòria, 13 finals i 3 annexos.

El capítol preliminar, disposicions generals, regula l'objecte i les finalitats de la llei d'acord amb el que hem assenyalat anteriorment, així com els principis d'actuació de l'Administració pública per assolir els objectius de la llei, tals com el de deguda avaluació, el de càlcul objectiu i el d'eficàcia. El primer comporta el

“deure els poders públics d’avaluar contínuament i periòdicament l’impacte ambiental de qualsevol política pública vigent o prospectiva perquè el seu resultat hagi de tenir-se en compte en la presa de decisions respecte a la política concreta” (art. 3.2). El principi de càlcul objectiu implica “el foment de la posada en pràctica de mecanismes de càlcul d’objectiu, d’acord amb els criteris nacionals i internacionals acceptats, de l’impacte de l’actuació humana en un determinat sector” (art. 3.3). Així mateix, el principi d’eficàcia comporta el “deure adoptar les decisions jurídiques i polítiques més eficients disponibles a cada moment per assolir els objectius” (art. 3.4).

El capítol I, per la seva banda, regula la mitigació del canvi climàtic. S’estableix l’obligació per part del Govern de presentar al Parlament els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i dels contaminants de l’aire per als períodes de compliment que estableixin la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut perquè el Parlament, si escau, els aprovi. A més, cal destacar el compromís del Govern a aprovar el Marc estratègic de referència de mitigació, en el termini d’un any a comptar de la data de publicació de la llei, a proposta de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic i amb la participació dels ens locals i els altres actors implicats. Com determina l’apartat segon de l’article 6, això és l’instrument que recull els objectius d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i dels contaminants de l’aire per als períodes que es consideren, així com una proposta de les mesures necessàries per aconseguir-los de forma planificada i establint indicadors quantitius anuals de l’impacte de les accions.

Un altre aspecte que cal ressenyar són els pressupostos de carboni. En l’article 7 es configuren com un mecanisme de planificació i seguiment per a la integració dels objectius de la llei en les polítiques sectorials. Per fer el seguiment de les emissions i la planificació de les polítiques, també es crea un inventari d’emissions a l’atmosfera i d’embornals de CO₂ de Catalunya (art. 8).

El capítol II regula l’adaptació al canvi climàtic i estableix l’obligació d’elaborar el marc estratègic de referència d’adaptació. Aquest marc l’ha d’elaborar el departament competent sobre canvi climàtic juntament amb els altres departaments i amb la participació dels actors implicats, prèvia presentació a la Taula Social del Canvi Climàtic, el marc estratègic de referència, el qual ha de preveure: l’avaluació dels impactes, d’acord amb l’estat del coneixement; la

identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics més vulnerables; una proposta de les mesures d'adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat (art. 10).

També es regulen els instruments de planificació i programació. Aquests, amb l'objectiu de reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, han de tenir en compte: a) l'avaluació sistemàtica dels impactes observats i previstos del canvi climàtic sobre els sectors socioeconòmics, els sistemes productius, els sistemes naturals i els territoris més vulnerables; b) el coneixement disponible sobre projeccions climàtiques a Catalunya per a diversos horitzons temporals; c) l'establiment de les mesures de resposta viables econòmicament, socialment i ambientalment que han d'adoptar les institucions públiques i els agents privats amb l'objectiu d'adaptar-se als impactes del canvi climàtic; d) un sistema de seguiment dels efectes de la planificació pel que fa a l'adaptació.

El capítol III, polítiques sectorials, tracta d'integrar a la planificació, l'execució i el control de les polítiques sectorials del Govern les mesures adequades per reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic. D'aquesta manera, s'introdueixen una sèrie de mesures d'adaptació i mitigació del canvi climàtic en els àmbits següents: agricultura, ramaderia, pesca, aqüicultura, aigua, biodiversitat, boscos, gestió forestal, energia, indústria, serveis, comerç, infraestructures, residus, salut, transports, mobilitat, turisme, formació professional, universitats, recerca, urbanisme i habitatge. Tot i que gairebé totes les mesures recollides tenen un caràcter programàtic o inspirador, també hi ha algun àmbit que preveu normativa sectorial. Dins d'aquest últim supòsit, cal esmentar l'àmbit dels residus.

Segons l'article 22, les mesures que s'adoptin pel que fa als residus han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat de la població i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, prioritzant l'estratègia de residu zero a fi d'estalviar material i de reduir-ne el processament, especialment en la reducció i penalització dels productes envasats amb un ús intensiu de combustibles fòssils. Basant-se en tot això, aquestes mesures han d'encaminar-se a: a) l'avaluació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades de la gestió dels residus. Cal fer un seguiment anual de les reduccions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle degudes a la millora en la gestió de residus; b) l'aplicació de la següent jerarquia pel que fa a les opcions de gestió de residus: la prevenció, la preparació per a la

reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o qualsevol altre tipus de valorització i, finalment, l'eliminació; c) el foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, per evitar-ne la deposició en abocadors; d) la incorporació de mesures de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels abocadors i l'ús de combustible procedent de residus; e) la substitució de matèries primeres per subproductes o materials procedents de la valorització de residus per afavorir la creació d'una economia circular.

A més, en la disposició final vuitena s'estableix que el Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de dos anys a comptar de l'entrada en vigor de la llei, un projecte de llei de prevenció dels residus i d'ús eficient dels recursos, com a llei marc que empari els canvis legislatius necessaris per avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del productor i el residu zero.

El capítol IV, sota el títol de "L'Administració en matèria de canvi climàtic" regula les funcions del Govern, i els seus òrgans competents. Així, en aquest capítol es regula la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic —art. 30—, com a òrgan col·legiat adscrit al departament competent sobre canvi climàtic que coordina la planificació de les polítiques climàtiques i en fa el seguiment. També es regula la Taula Social del Canvi Climàtic —art. 31—, el qual canalitza la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques. De la mateixa manera, es regula el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic —art. 32—, al qual es designa la funció de presentar al Govern i al Parlament les propostes dels pressupostos de carboni per als diversos períodes temporals i en fa el seguiment i l'avaluació.

També cal destacar l'article 29, que obliga els departaments de la Generalitat i els seus organismes dependents a: a) disposar d'un inventari de les emissions de gasos d'efecte hivernacle generats pels immobles, les instal·lacions i els serveis que presten; b) fer una auditoria energètica dels edificis públics que siguin propietat de la Generalitat i dels edificis en els quals la Generalitat sigui arrendatària i les condicions contractuals ho permetin, així com dels seus processos de treball, i promoure l'autoconsum; c) establir un objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i un programa d'actuació que tingui en

compte les directrius que a aquests efectes hagin establert els departaments competents pel que fa a energia i habitatge, en tot allò relatiu a les energies renovables i a l'estalvi i eficiència energètics; d) incloure en tots els procediments de contractació pública en què resulti adequat al seu objecte especificacions tècniques i criteris d'adjudicació específics relatius a l'ús eficient de recursos i a la minimització de les emissions de gasos d'efecte hivernacle; e) elaborar i fer públic un informe sobre el grau de consecució dels objectius i de les mesures correctores que es proposin si hi ha desviació.

A més, es fomenta la participació de l'Administració local en les polítiques climàtiques —art. 33—, la contractació verda —art. 35—, i la col·laboració o cooperació internacional —art. 36.

Per la seva banda, el capítol V es dedica a la fiscalitat ambiental, i estableix que les "administracions públiques de Catalunya han de gravar les actuacions que fan augmentar la vulnerabilitat o incrementen les emissions de gasos d'efecte hivernacle i han d'incentivar fiscalment les actuacions que afavoreixen l'adaptació al canvi climàtic o la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle quan sigui possible tècnicament i econòmicament". Amb aquesta finalitat, la llei crea dos impostos: l'impost sobre les activitats econòmiques que generen diòxid de carboni, i l'impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells. No obstant això, la regulació de tots dos es posposa a l'aprovació de sengles lleis, que han d'acomodar-se al que disposen les disposicions finals onzena i dotzena. Sobre aquests dos nous impostos es determina que la seva recaptació s'ha de destinar a nodrir el Fons Climàtic.

Però també es reconfigura l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, creat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Cal destacar que s'eliminen les bonificacions, les devolucions i altres mesures similars sobre l'adquisició i el consum de recursos energètics d'origen fòssil i derivats. No obstant això, se n'exclouen les ajudes a l'adquisició i el consum de

recursos energètics d'origen fòssil per a la maquinària del sector primari, mentre no hi hagi una font d'energia alternativa viable (art. 39.3).

Finalment, el capítol VI regula altres instruments perquè es compleixin els objectius de la llei, com l'anomenat Fons Climàtic. Com es preveu en l'article 51, aquest fons de caràcter públic té com a objectiu convertir-se en un instrument necessari per executar polítiques i accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Es finança amb els ingressos procedents dels instruments establerts pel capítol V; els ingressos procedents de la participació en sistemes de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle de la Unió Europea, o d'altres instruments de fiscalitat climàtica d'àmbit estatal, així com la part dels ingressos de les assignacions tributàries de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a finalitats d'interès social que corresponguin a la Generalitat i que aquesta destini a la protecció del medi.

A més, en aquest mateix capítol també es regula el règim de comerç de drets d'emissió —art. 53—, la transferència de coneixement —art. 53—, la participació pública en plans i programes i accés a la informació ambiental —art. 54—, i l'avaluació de l'empremta de carboni de productes —art. 56.

Pel que fa a les disposicions addicionals de la llei, cal destacar-ne algunes per l'interès rellevant.

En primer lloc, la disposició addicional primera estableix els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle següents: l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 és del 40% respecte a l'any base (1990), del 65% per al 2040 i del 100% per al 2050; l'objectiu de reducció dels òxids de nitrogen per a l'any 2020 és del 35%, i el de reducció de les partícules en suspensió de menys de 10 micres, del 30%; els objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle per a les energies renovables en la producció energètica i per a l'eficiència energètica són del 100% amb l'horitzó d'un model neutre en emissions de carboni per al 2050.

En segon lloc, la disposició addicional segona estableix que el Govern ha d'impulsar l'aprovació d'un pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya. Aquest pacte, juntament amb el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de

Catalunya (2012-2020), i els documents que se'n derivin són els elements de planificació de les polítiques de mitigació en l'àmbit energètic.

Finalment, la disposició final sisena estableix els terminis per a la implantació de l'empremta de carboni de productes, en concret: els productes als quals es refereix l'annex III.1 (productes i materials per a la construcció comercialitzats a Catalunya), han de comercialitzar-se d'acord amb el que estableix l'article 56 a partir de l'1 de gener de 2020; els productes als quals es refereix l'annex III.2 (productes industrials finals comercialitzats a Catalunya) han de comercialitzar-se d'acord amb el que estableix l'article 56 a partir de l'1 de gener de 2021.

Quant a les disposicions finals, cal indicar que s'anuncia l'elaboració de projectes de llei pel que fa a prevenció de residus i d'ús eficient dels recursos, de foment de l'agricultura i la ramaderia sostenibles o d'un projecte de llei de biodiversitat, patrimoni natural i connectivitat biològica.

3. LA LLEI 18/2017, D'1 D'AGOST, DE COMERÇ, SERVEIS I FIRES

Atesa l'estreta connexió entre la protecció del medi ambient i l'ordenació del comerç, també cal esmentar en aquesta crònica l'aprovació de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Aquesta llei parteix del model de convivència entre l'activitat comercial, la prestació de serveis i l'ús residencial del sòl de les poblacions mediterrànies del sud d'Europa, el qual permet adoptar criteris de gestió urbana sostenible. En aquest sentit, en el preàmbul d'aquesta norma es fa referència al fet que aquesta realitat "que afavoreix la compactibilitat dels pobles i ciutats, és precisament la que plantegen, defensen i adopten els representants dels diversos estats de la Unió Europea en l'Estratègia territorial europea per a un desenvolupament equilibrat i sostenible, que ja reconeix la necessitat d'exercir control sobre l'expansió territorial urbana indiscriminada per poder garantir el creixement sostenible de les ciutats en un futur". D'aquesta manera, es ressalta que el conjunt de normativa sobre comerç de Catalunya és fruit d'aquest model, que "posa en relleu l'íntima relació existent entre la implantació i l'exercici de l'activitat comercial o de prestació de determinats serveis i la mobilitat i la planificació urbanística sostenible".

Aquesta llei nova neix amb l'objectiu d'actualitzar i compilar en un mateix cos legal la dispersa, i en alguns casos obsoleta, normativa existent pel que fa a comerç interior, horaris comercials i activitats firals, tot i que deixa al marge l'ordenació dels equipaments comercials que es mantenen en el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. D'aquesta manera, el legislador ha considerat necessari remodelar i compilar en dos textos normatius tota la legislació vigent des d'aquest punt de vista mantenint les característiques essencials del model comercial mediterrani —concentració, diversitat i singularitat—, d'acord amb el conjunt de raons imperioses d'interès general que estableix la normativa de la Unió Europea.

En aquest context, aquesta llei consolida un nou marc normatiu dirigit a la consecució de sis objectius principals. D'entre aquests objectius destaquem el sisè, que estableix principis i criteris que han de permetre avançar en el manteniment de la funció social i dinamització cultural del comerç de proximitat, en la integració de noves formes de comerç i els nous valors que poden incorporar-se, com el de l'economia circular. Però per al desplegament d'aquests principis es requereix la implicació i l'impuls de les administracions locals. A més, aquesta llei determina el contingut mínim de la planificació comercial i urbanística per a l'aplicació general dels criteris de cohesió i equilibri territorial, defensa de la ciutat compacta, proximitat i fàcil accés de l'oferta comercial per als consumidors, l'adequació de la xarxa viària i la connexió amb xarxes de transport públic.

Amb aquesta norma es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, simplificar la regulació i la reducció de càrregues administratives dels operadors, els quals han de regir-se per una competència lliure i lleial, que ha de permetre a tots els ciutadans l'accés a béns i serveis, i evitar de forma adequada les externalitats negatives de l'activitat econòmica. En segon lloc, establir els mecanismes per fomentar la professionalització de l'activitat comercial i la prestació de serveis. En tercer lloc, afavorir la cohesió social, ambiental, econòmica i institucional com a base d'un model d'economia circular i sostenible que permeti recuperar tots els recursos de forma eficient, garanteixi l'aprovisionament, la diversitat de l'oferta i les condicions bàsiques per a la lliure i lleial competència, i configuri un model de pobles, ciutats i barris que ofereixi

les mateixes possibilitats a tots els ciutadans i atots els sectors socials. En quart lloc, vetllar pel respecte dels drets i els interessos dels consumidors i usuaris. Finalment, promoure la igualtat d'oportunitats i la formació tècnica i professional dels comerciants i els treballadors del sector comercial, així com el respecte dels drets laborals en general, i específicament les normes de prevenció de riscos laborals.

4. EL REGLAMENT DE L'IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. Es tracta del Decret 141/2017, de 19 de setembre, que té per objecte el desplegament normatiu per aplicar l'impost sobre les estades en establiments turístics regulat en la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre gran establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Aquest impost es va crear mitjançant la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i va entrar en vigor l'1 de novembre del 2012. Però ara el legislador ha considerat necessari revisar-lo i modificar-lo. Això s'ha dut a terme en el capítol VI de la Llei 5/2017, que estableix una nova regulació completa de l'impost que grava les estades en establiments turístics, encara que, tal com es manifesta en el preàmbul, només se'n modifiquen aspectes concrets. Com a novetats d'aquesta norma, cal destacar la introducció de nous supòsits d'exempció —per a les estades que es duen a terme com a conseqüència de causes de força major i per motius de salut. També destaca l'anomenada “autoliquidació agregada”, que permet efectuar el pagament agregat de les quotes de l'impost reportades respecte d'un col·lectiu de substituïts o d'un conjunt d'establiments o equipaments. Finalment, també cal esmentar que la norma estableix l'obligació de subministrar informació amb caràcter periòdic per part de les autoritats portuàries.

5. ALTRES NORMES D'INTERÈS

A més de les que hem indicat, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat algunes altres normes d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, entre altres, en primer lloc, l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal a Catalunya.

L'objecte d'aquesta ordre és regular els instruments d'ordenació forestal i el procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment (art.1). Es tracta d'una ordre que s'emmarca en l'article 32.3 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, el qual estableix que correspon a les comunitats autònomes aprovar les instruccions d'ordenació i l'aprofitament de forests.

Aquesta ordre deroga l'Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal, integra la regulació de tots els instruments d'ordenació forestal, independentment de la titularitat dels terrenys forestals. Es regulen el contingut i el procediment d'aprovació dels projectes d'ordenació forestal, dels plans tècnics de gestió i de millora forestals i dels plans simples de gestió forestal, els objectius de la qual han de concordar amb les figures de planejament de rang superior.

La finalitat de la nova ordre és adaptar les previsions establertes per l'Ordre AAM/246/2013, de 14 d'octubre, al nou tipus d'instrument d'ordenació forestal que introdueix l'última modificació de la Llei 6/1988, de 30 de març, per l'article 177 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquest nou tipus d'instrument d'ordenació forestal són els projectes d'ordenació forestal d'àmbit municipal i supramunicipal (PFM), que poden promoure les entitats locals i que s'aproven per mitjà de la resolució del director general competent en boscos.

Així, doncs, la nova ordre adapta les previsions establertes per l'Ordre AAM/246/2013 als dos nivells de planificació agrupada per integrar-ne el contingut i agrupar de forma conjunta en una única norma la regulació dels diversos instruments d'ordenació forestal existents.

Pel que fa al contingut, l'ordre estableix que la planificació de la gestió de les finques forestals es du a terme mitjançant els tipus d'instruments d'ordenació forestal següents (art. 4): a) Projecte d'ordenació forestal (POF), aplicable a les

finques forestals de titularitat pública superiors o iguals a 250 hectàrees; b) Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestals (PTGMF), aplicable a les finques forestals de titularitat pública o privada superiors a les 25 hectàrees; c) Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF), aplicable a les finques forestals de titularitat pública o privada iguals o inferiors a 25 hectàrees.

d) Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestals conjunt (PTGMFc), per a finques de titularitat pública o privada de diverses propietats forestals dins d'un marc territorial conjunt de gestió forestal coherent; e) Projecte d'ordenació forestal d'àmbit municipal o supramunicipal (PFM), aplicable a la totalitat dels terrenys forestals inclosos dins del marc territorial mínim corresponent a un mateix terme municipal, o de diversos termes municipals, sempre íntegrament. El PFM, per l'abast del seu àmbit i la seva estructura, inclou també el contingut corresponent a un pla de prevenció d'incendis municipal (PPI), i la seva aprovació implica també la aprovació del PPI corresponent.

Els instruments d'ordenació forestal es poden aplicar de manera individual o agrupada. En l'apartat segon de l'article 4 es regulen els instruments d'ordenació forestal agrupats, que corresponen als PTGMFc i PFM, que inclouen finques públiques o privades de diversos propietaris. Però en el precepte esmentat també es determina que els instruments d'ordenació forestal agrupats es poden aplicar dins dels marcs territorials següents: a) territoris amb coherència forestal quant a la gestió conjunta de les seves infraestructures particularment i de la resta d'actuacions en general, aprovada per l'administració forestal competent, i b) territoris que coincideixen amb la totalitat d'un o més municipis.

A més a més, per a aquest tipus d'instrument d'ordenació forestal, l'apartat 4 de l'article 4 determina els requisits que han de complir:

a) En el cas dels PTGMFc, cal un compromís d'adhesió que constitueixi un mínim del 30% de la superfície forestal i representi un mínim del 30% de la propietat forestal dels terrenys del seu àmbit.

b) En el cas dels PFM, cal un compromís d'adhesió que constitueixi un mínim del 30% de la superfície forestal i representi un mínim del 30% de la propietat forestal dels terrenys del seu àmbit. A més, a l'inici de cada període de cinc anys en què s'estructura temporalment el PFM, aquest percentatge

ha de correspondre, almenys, al 50% de la superfície forestal i representar el 50% de la propietat forestal dels terrenys que constitueixen el bloc d'execució conjunta (BEC) corresponent.

c) Si en l'àmbit dels IOF agrupats la fragmentació de la propietat forestal és molt elevada, el percentatge d'adscripció de la propietat exigible es pot reduir respecte al nombre de propietaris, no de superfície, a petició de l'entitat impulsora de la redacció del IOF agrupat, previ informe justificatiu emès per la direcció general competent en matèria de boscos respecte a les finques de titularitat pública o pel CPF respecte a les finques de titularitat privada.

La finalitat dels instruments d'ordenació, segons l'article 5, és facilitar i millorar la gestió de les finques forestals i maximitzar-ne la rendibilitat en béns o serveis en el marc d'una gestió forestal sostenible, d'acord amb els objectius següents: "a) Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i aprofitar adequadament els recursos naturals renovables. b) Facilitar la participació de les persones propietàries dels terrenys forestals mitjançant eines de planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels terrenys en el marc de la política forestal de Catalunya. c) Col·laborar en l'augment de la qualitat de vida i en la generació d'ocupació de les poblacions rurals, i proveir de matèries primeres i serveis la societat".

Així mateix, aquesta ordre estableix el procediment i els tràmits —capítol III—, l'inici de les actuacions que poden dur-se a terme i el seguiment —capítol IV—, i la gestió forestal agrupada —capítol V.

En segon lloc, en l'àmbit dels residus, també cal destacar una sèrie de resolucions per les quals es convoquen subvencions de l'Agència de Residus de Catalunya per al foment de l'economia circular (Resolució TES/792/2017, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular, publicada en el DOGC de 19 d'abril de 2017; i la Resolució TES/859/2017, de 19 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular, publicada en el DOGC de 25 d'abril de 2017).

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos (annex 1.1 Resolució TES/792/2017). A l'efecte d'aquestes subvencions, l'annex 2 de la Resolució TES/792/2017, preveu la definició d'economia circular com l'economia que és reparadora i regenerativa per disseny, i que té com a objectiu mantenir els productes, components i materials en la seva utilitat i valor més alts en tot moment, i distingeix entre cicles tècnics i biològics.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents: projectes d'implementació al mercat de nous productes o serveis inclosos en la categoria de la classe A; els estudis d'obtenció i verificació de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis de les categories incloses a la classe B.

El termini màxim per executar les actuacions objecte de la subvenció és de 24 mesos a comptar de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

Els beneficiaris poden ser les empreses privades i agrupacions d'empreses privades que tinguin almenys un establiment operatiu situat a Catalunya.

Pel que fa a l'import, s'estableix que és d'un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajuda per a pimes o del 50% si el beneficiari no és pime, amb un màxim de 30.000 euros per projecte.

6. ALGUNES ACTUACIONS D'INTERÈS DES DE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

6.1. L'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

El Pla de la XI legislatura del Govern de la Generalitat de Catalunya preveia l'aprovació de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, en compliment del que estableix el Conveni de diversitat biològica de les Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011 fins a 2020 que el desplega i l'Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

Aquesta Estratègia té un horitzó 2030, i un primer pla d'acció 2017-2021. S'articula d'acord amb sis àmbits que es basen en sis principis rectors, que defineixen les prioritats de l'acció del Govern per conservar la naturalesa i frenar la pèrdua de biodiversitat. Aquests principis són els següents: el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; la conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics en el marc del canvi climàtic; el model territorial; la integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials; l'estructura administrativa, la fiscalitat i el marc legal, i la implicació social.

Entre els mesos de març i maig de 2017 es va dur a terme el procés de participació ciutadana de l'Estratègia per donar a conèixer els documents inicials de l'Estratègia i recollir les aportacions dels sectors que estan més vinculats amb la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en particular, i de la ciutadania en general.

Fruit d'aquest procés participatiu, la proposta d'objectius i accions de l'Estratègia presentada a l'abril de 2017 s'ha modificat, i ha donat lloc a la versió del document publicat al juliol de 2017.

Com s'afirma en l'Informe de resultats i tornada del procés de participació ciutadana, durant el procés es van rebre més de 700 aportacions. Després de ser analitzades i valorades per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, s'han incorporat en un 75,38%. La incorporació ha estat total en un 61,81% (437 propostes) i parcial en un 13,57% (96 propostes). La resta, un 24,60% (174 propostes) no s'ha incorporat en el document de l'Estratègia.

6.2. L'Agenda Urbana catalana

El Govern de la Generalitat de Catalunya es va comprometre, en la reunió de l'assemblea general de les Nacions Unides (ONU), celebrada el passat mes de setembre a Nova York, a implementar els acords assolits en la Nova Agenda Urbana aprovada a l'octubre a Equador. Com a conseqüència d'això, el Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant l'Agenda Urbana de Catalunya. Aquesta Agenda es basa en una perspectiva més territorial, entenent que s'ha de concebre més enllà de les àrees urbanes o de les principals àrees metropolitanes. A més, el full de ruta per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de

Catalunya també preveu la creació d'un grup de treball interdepartamental, així com una assemblea urbana de Catalunya.

Portem a col·lació també l'Acord del Govern GOV/112/2017, d'1 d'agost, per impulsar l'elaboració del Pacte Nacional per a la Renovació Urbana de Catalunya. Els departaments de Governació i de Territori i Sostenibilitat impulsen el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana amb l'objectiu de potenciar la renovació, millora i transformació de ciutats, pobles i barris amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, amb especial incidència en la necessitat d'incrementar els nivells de rehabilitació fins a assolir els estàndards d'altres països.

En aquest sentit, aquest Pacte Nacional pretén ser el marc de referència per a la creació de polítiques de renovació urbana des d'un punt de vista integral, vinculat a l'Agenda Urbana catalana.

Algunes de les línies d'actuació són el benestar i confort de les persones, la seguretat estructural, la cohesió social i prevenció i correcció de desigualtats i vulnerabilitats, la transició energètica i la reducció d'emissions de CO₂, l'economia circular i col·laborativa, la introducció de noves i millors prestacions, l'accés a l'habitatge i a la ciutat i l'aplicació de les noves tecnologies, entre altres.

L'impuls al procés d'elaboració del Pacte de Renovació Urbana l'assumeix la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Per això, han de crear la Taula del Pacte Nacional per a la renovació urbana, que ha d'elaborar el document del Pacte Nacional en el període d'un any.

6.3. El Mapa de qualitat del cel nocturn a Catalunya

Des del 2012, la Direcció General de Qualitat Ambiental va engegar el projecte d'avaluar la qualitat del cel nocturn als parcs naturals i altres espais d'interès natural de Catalunya, amb la realització de campanyes de mesurament de la brillantor del fons del cel anuals, amb l'objectiu de detectar els que conserven millors condicions i d'impulsar projectes de protecció.

Seguint aquesta línia, al juliol de 2017 s'ha publicat l'Informe de la campanya d'avaluació de la qualitat del cel nocturn a Catalunya 2016, elaborat pel Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica. Paral·lelament s'ha actualitzat el Mapa de qualitat del cel nocturn a Catalunya.

Dels resultats de l'última campanya es conclou que el territori del Montsec continua destacant perquè té la millor qualitat de cel nocturn, continua sent de categoria excepcional, i que les zones que conserven millors condicions en la qualitat del cel es concentren a la Franja de Ponent i al Pirineu.

Aquesta última campanya també demostra que el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Marurici té una qualitat de cel nocturn molt bona i en alguna àrea és excepcional. A més, es constata que els parcs naturals dels Ports i del Cadí-Moixeró tenen un cel fosc d'elevada qualitat, mentre que al cap de Creus i al Montgrí-Illes Medes i Baix Ter depèn de la proximitat als nuclis urbans de la zona que s'analitzi.

A més, aquest any s'han introduït en el Mapa els resultats de les anàlisis realitzades a la conurbació barcelonina. Aquests resultats revelen una qualitat del cel nocturn baixa o molt baixa, cal desplaçar-se més de 100 km per poder gaudir d'una visió clara de la Via Làctica.